Los días de la ira

De cómo el periodismo
está siendo asesinado en México

J. JESÚS LEMUS

EDITORIAL TERRACOTA

ÍNDICE

A manera de prólogo 9

Capítulo 1. El apostolado 17

Capítulo 2. El gremio invisible 29

Capítulo 3. ¿Activistas o periodistas? 55

Capítulo 4. Periodistas sí, pero periodistas no 81

Capítulo 5. Cuando el diablo da entrevistas 119

Capítulo 6. La precariedad, la otra agresión 143

Capítulo 7. La autocensura, el espíritu del periodismo mudo 167

Capítulo 8. Zonas de silencio, oportunidad para las redes sociales 191

Capítulo 9. Periodismo de a pie 219

Capítulo 10. Ni vistos ni oídos 243

Capítulo 11. Organismos obsoletos 265

Capítulo 12. La cárcel, el otro bozal 289
Capítulo 13. ¿Hasta dónde somos responsables de nuestra desgracia? 311
Epílogo 337
Bibliografía 345
Acerca del autor 351

1 EL APOSTOLADO

No le digas a mi madre que soy periodista,
ella piensa que soy pianista en un burdel.
Thomas Kennerly Wolfe

Como un nómada, he recorrido el país de lado a lado. Desde que alguien en la clandestinidad ordenó mi muerte me convertí en un periodista desplazado. Esa desgracia —lo puedo ver ahora— se tornó para mí en una oportunidad; creo que haciendo trabajos de periodismo, en por lo menos dos o hasta tres ocasiones, he caminado de costa a costa y de frontera a frontera este inmenso territorio que llamamos México.

La dolorosa travesía de periodista desplazado, que comenzó en 2011 —y que hasta 2023 aún seguía—, me ha llevado no solo a conocer, sino a explorar y a hurgar debajo de las capas de la sociedad, temas que de otra forma nunca hubiera conocido. Problemáticas que allí están y que desde mi concepción están siendo olvidadas y dejadas de lado por los grandes medios corporativos y tradicionales de comunicación, que en la vorágine del diarismo (la información del día a día) solo decoran con nimiedades la memoria histórica de nuestra sociedad.

Ser un periodista implica mucho, pero significa más cuando se te obliga al desarraigo: no es solo padecer el dolor contenido por el abandono de la tierra y de la gente que uno quiere. No es solo vivir todos los días a salto de mata, pensando en el momento en que la bala perdida que ya tiene nombre te encuentre. Ni tampoco son solo las dudas nocturnas lacerantes sobre qué es lo que uno hizo para llegar a esta situación. Como periodista desplazado siempre hay algo más que igualmente aniquila y ya no te deja vivir en paz.

En mi caso, este obligado desplazamiento ha desembocado también en el surgimiento de una conciencia social, que empuja más allá de los sentidos; ha sido la maduración de un pensamiento que obliga a ver el mundo —por pequeño que sea— con otros ojos, donde la transformación de la perspectiva periodística reclama un hecho inevitable: denunciar para transformar.

Este correr de un lado para otro, tratando de preservar la vida, ha sido combustible y fermento que me ha llevado al sentimiento constante de la necesidad de la denuncia para lograr un cambio. Un cambio que, pienso, se debe construir con las herramientas que uno tiene a la mano. Como periodista, siempre pisando los terrenos del desahucio social, la única herramienta con la que me he forjado y con la que hoy me sostengo en esta necesidad de transformación del mundo —de mi pequeño mundo—, es la de la denuncia periodística.

Con ella me he armado. He caminado en los últimos años por las regiones más apartadas, a veces las más inhóspitas, del país, no solo para darle un sentido al destierro al que he sido obligado, sino para demostrarme y demostrar que mientras nos queden la palabra y la voluntad, no habrá fuerza, por oscura que sea, que nos limite en esta profesión, la que considero es una gracia de Dios con la que hemos sido tocados unos cuantos.

El periodismo como una gracia de Dios es un término que acuñé allá por 1988, cuando me inicié en estas labores. Se lo escuché decir a Roberto Murillo Rocha, el director del periódico *El Cruzado*, de Uruapan, que fue mi primera casa editorial. Aquel

periodista que fue el que me dio la oportunidad de ser reportero, en alguna ocasión me dijo que el periodismo no era solo un trabajo; "es una forma de vida", me explicó mientras compaginábamos manualmente el tabloide monocromático, de 16 páginas, impreso con linotipo.

Roberto Murillo Rocha, un hombre profundamente religioso, me dijo —con aquella forma simpática que tenía de enseñar—, que el periodismo era una bendición de Dios que se manifestaba en forma de tinta. Que habría que tener mucho cuidado de no mancharse las manos de tinta, "porque la tinta se mete por la piel, se va a las venas y se anida en el corazón: después ya nadie puede ser el mismo. Ya nada puede ser igual. Porque del corazón, la tinta pasa a la cabeza. Y entonces uno comienza a pensar de una forma distinta al resto de la gente".

—Eso —me dijo mirándome fijamente a los ojos— se llama denuncia social y es el esqueleto que sostiene a cualquier periodista—. Es lo único que nutre al verdadero periodismo —sentenció.

Las palabras de Roberto Murillo Rocha las he atesorado desde entonces. Han estado conmigo todos estos años de trabajo. Pero comenzaron a calar con mayor fuerza desde que me convertí en un periodista en riesgo de muerte. Cuando, igual que decenas, tal vez cientos de periodistas más, a causa de las amenazas de muerte, comencé a asumir la conciencia de que siempre se puede estar escribiendo el último artículo y, por eso, se debe poner todo en la redacción, como si fuera el último aliento de vida, para no dejar de decir la realidad por cruda y difícil que sea.

La certeza de la denuncia periodística ha caminado inquebrantable a mi lado en los últimos años. Con ella como fundamento de esto que soy he pretendido desvelar desde el *underground* algunos de los principales problemas que nos aquejan como sociedad y como gremio informativo. Las dificultades han sido cada vez mayores, no tanto en el plano de la investigación, sino más bien en el de la publicación. Por increíble que sea, es cierto: en México cuesta más trabajo publicar que investigar. De ese nivel son los poderes fácticos que se oponen a la exposición de la verdad.

En México cada vez es más difícil publicar temas de coyuntura. Cada vez son menos los medios de comunicación que quieren asumir el riesgo de la publicación de temas de denuncia, que se alejan de la cómoda agenda rentable en ingresos económicos y en armonía con los poderes fácticos, por eso cada vez hay menos periodistas de planta en las redacciones de los grandes medios corporativos. Por eso el *boom* de los periodistas independientes y del surgimiento de portales informativos que apenas sobreviven.

Muchos de los medios de comunicación corporativos —incluidos aquellos que se regodean en ser los paladines de la libertad de expresión— a los que he tocado en busca de un espacio para publicar mis trabajos, me han dado, igual que a otros periodistas de investigación y desplazados, con la puerta en la nariz: simplemente no les interesa —pese a la relevancia de la información— la publicación de temas que tienen que ver con despojos, desplazamientos, violación de derechos humanos o violencias del Estado que afectan a los mexicanos más pobres y abandonados.

Esa realidad, la del periodista de investigación tocado en la conciencia por el desplazamiento y con la necesidad del ejercicio de la denuncia social, pero sin un medio que quiera hacer eco a su trabajo, me ha llevado —igual que a otros periodistas en circunstancias similares— a otra situación, la de publicar por cuenta propia; a veces en portales independientes, a veces en libros o medios internacionales, pero siempre fuera de los medios tradicionales y malamente llamados nacionales, hasta donde ha llegado no solo la censura oficial, sino la más peligrosa de todas las prácticas: la autocensura por intereses económicos.

Después de todo, ¿qué es el periodismo? Solo un acto permanente de denuncia. Quien diga lo contrario, no está pensando en la transformación de la sociedad a través del servicio de la información, sino en las relaciones públicas para beneficio personal, que se puede lograr de manera lucrativa mediante la venta del silencio. Un silencio altamente cotizado en este México de la barbarie y el despojo, en el que se han instalado cómodamente cientos, miles de comunicadores, que ni idea tienen del daño que

ocasionan con su omisión a cambio de unos cuantos, a veces de muchos, cientos, miles, millones de pesos.

Como decía, el desplazamiento, al que me obligaron las amenazas de muerte para dejar mi natal Michoacán desde hace ya ocho años, me ha llevado a conocer y a querer más el periodismo. Me ha abierto a la posibilidad de un periodismo verdaderamente libre, sin concesiones; que escudriña en todos los rincones de la sociedad para exponer la verdad del otro México, el que no sale en las noticias, el que no es visto desde las esferas del gobierno, el que es despreciado por los poderes económicos, pero que late fuerte y que reclama ser visto y quiere tener voz.

En esta condición, en la que primordialmente lucho por preservar la vida, he visto un México como un mosaico de historias y hechos que pasan desapercibidos para el grueso de los comunicadores mal llamados periodistas; donde —he palpado con tristeza— muchos de esos que se hacen llamar periodistas, fascinados por el brillo del dinero, prefieren voltear la mirada hacia cualquier lado, para no ver, y menos denunciar, el llanto y el dolor de una sociedad lacerada a causa del dominio del poder en cualquiera de sus manifestaciones.

En la travesía del destierro lo mismo me ha dolido el despojo del agua y el suelo en las poblaciones del norte, que los desplazamientos de pueblos originarios a causa de la violencia en el cuerno sur de la república mexicana. Los asesinatos y las historias de vida de defensores de derechos humanos y del medio ambiente más de una vez me hicieron flaquear en el camino. La trata de personas, el elevado índice de feminicidios, las madres cavando en los llanos en busca de sus hijos desaparecidos, los inmigrantes con su inmenso dolor sobre sus espaldas, me han invitado en más de una ocasión a dejar de lado el periodismo —ante lo inútil que es en este México el acto de denuncia— para sumarme al activismo social.

Si acaso me he resistido a cruzar la tenue línea que divide el activismo social del periodismo, es porque —en mi convicción— el periodismo también es una forma de activismo: el periodismo denuncia. Y la denuncia tiene como único fin la activación de

3 ¿ACTIVISTAS O PERIODISTAS?

El periodismo y la denuncia, son el poder para equilibrar el poder, y la solución al poder tóxico.
Marco Antonio Aviña Kick, periodista michoacano

En la ola de violencia que azota al periodismo no se puede disociar la que golpea a los activistas sociales y viceversa. Si bien es cierto que el periodismo y el activismo son dos cosas distintas, también resulta que ambas confluyen en algún punto de su cometido que las hace similares: la denuncia para visibilizar los problemas de la sociedad es donde convergen estas dos actividades de riesgo. Solo así se entiende que el número de agresiones contra periodistas se manifieste casi en la misma medida que el que enfrentan los activistas defensores del medio ambiente y el territorio.

Para ilustrar lo anterior, basta señalar las cifras registradas en nuestro país, desde 2016 hasta el cierre de este trabajo en octubre de 2023, donde el conteo señala que en este período han sido ejecutadas 161 personas, de las que cien eran periodistas y 61, activistas, las que de alguna manera ejercieron desde su trinchera, a veces a través de la movilización a veces por medio de la denuncia periodística, su labor de denuncia social.

La mayoría de los periodistas asesinados en este período cruzaron sin saberlo la tenue línea del periodismo para ubicarse dentro del activismo social, mientras que casi todos los activistas también se desplazaron de su actividad original a la labor de periodistas. Así, de los cien periodistas asesinados entre 2016 y 2023, por lo menos 34 de ellos realizaban labores de activismo, mientras que de los 61 activistas que cayeron ejecutados, por lo menos 26 de ellos complementaban su labor con publicaciones periódicas en medios locales de información.

Veámoslo con más detalle. Durante 2017, de los 17 periodistas que cayeron abatidos por las balas de la delincuencia o el Estado, por lo menos cuatro hacían labores de activismo, ya fuera mediante su participación en organizaciones defensoras de derechos humanos y el medio ambiente, o como voceros de organizaciones de defensa del territorio, dando voz a las quejas sociales principalmente por despojo de recursos. De los siete activistas y defensores que fueron ejecutados en ese mismo año, por lo menos tres de ellos hacían también labores ocasionales de periodismo.

En 2018, de los 18 periodistas asesinados por lo menos cinco daban voz de manera recurrente a organizaciones de sus comunidades que encaraban conflictos con megaproyectos económicos, mientras que de los catorce activistas ejecutados, por lo menos cuatro tenían una participación activa en los medios de comunicación de sus localidades, a veces como voces autorizadas para hablar de violaciones a los derechos de sus comunidades, a veces como locutores o redactores de noticias, pero la mayoría de estas víctimas incidió en la denuncia social.

Por lo que hace a las víctimas de 2019, de los trece periodistas ejecutados por lo menos cuatro eran reconocidos por su trabajo de cobertura de temas que afectaban a sus comunidades en el ámbito del arrebato de los recursos naturales y la instalación de megaproyectos económicos patrocinados por empresas transnacionales y otras de capital mexicano de gran envergadura. De los siete activistas ejecutados en este mismo lapso, por lo menos cinco también se reconocían como colaboradores frecuentes del

periodismo en medios locales, a través de los cuales hacían sus denuncias y difundían su trabajo de defensa comunitaria.

De los trece activistas asesinados en el período referido de 2019, solamente Óscar Cazorla, asesinado el 9 de febrero en Juchitán, Oaxaca; José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, desaparecidos el 17 de enero y sus cuerpos sin vida localizados el 18 de enero en Amatán, Chiapas, y María Cristina Vázquez Chavarría, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de su domicilio el primero de julio de 2019 en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, no están clasificados como activistas que pasaron al periodismo.

Los que sí combinaron su labor de activistas con la ocasional de periodistas son Sinar Corzo, quien fue ejecutado el 3 de enero en el municipio de Arriaga, Chiapas; Gustavo Cruz Mendoza, asesinado el 20 de enero en Santiago Jocotepec, Oaxaca; Bernardino García Hernández, asesinado el 23 de enero en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca; Samir Flores Soberanes, acribillado en la puerta de su casa el 20 de febrero en Amilcingo, Morelos; Eulodia Lilia Díaz Ortiz, asesinada el 25 de marzo en Santiago Tianguistenco, Estado de México; Abiram Hernández Fernández, asesinado el 29 de marzo en Xalapa, Veracruz; Luis Armando Fuentes, ejecutado el 11 de abril en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca; Héctor Domínguez, asesinado el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y José Luis Álvarez Flores, encontrado muerto el 10 de junio en Palenque, Chiapas.

De todos estos casos, es el de Samir Flores Soberanes el que mejor evidencia la tesis de cómo los activistas que pasan al periodismo son los que se colocan en mayor riesgo. A Samir le arreciaron las amenazas de muerte hasta que hizo eco de sus protestas a través de la radio comunitaria de su localidad. Antes solo era visto por el gobierno local del estado de Morelos como un activista más y "un facineroso, opositor a los proyectos de desarrollo propuestos por la federación", según lo describió un informe interno de la Secretaría de Gobierno fechado en enero de 2015, en la administración de Graco Ramírez Abreu.

Hasta antes de 2016, fecha en la que Samir Flores expresó, a través de la estación de radio comunitaria que él mismo fundó, sus protestas por la defensa del agua y el territorio, principalmente las relacionadas con la inocuidad de la agricultura, solo las manifestaba a través de marchas y plantones frente a instancias del gobierno local. Con la radio como herramienta de denuncia social, fue cuando comenzó a ser más observado por el gobierno estatal.

Aun cuando en el origen Samir Flores fincó su lucha social en la protección de la agricultura y el cuidado del agua para el suministro a los cultivos a pequeña escala, tras el anuncio del gobierno federal para poner en marcha el llamado Proyecto Integral Morelos, consistente en la construcción de un gasoducto y dos plantas termoeléctricas, inició una movilización permanente no solo contra las empresas españolas Abengoa y Elecnor, inversoras del proyecto, sino contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del gobierno federal y el estatal de Morelos, gestoras del mismo.

La movilización de Samir, que despertó la conciencia de todos los habitantes del norte de Morelos y el sur de Puebla y Tlaxcala para evitar que se construyera el gasoducto y se pusiera en operación la planta termoeléctrica de Yecapixtla, donde se hizo una inversión de 25 millones de pesos, fue lo que lo colocó en la mira de sus asesinos, pues desde su estación de radio, Amiltzinko 100.7 FM, comenzó a organizar a todas las poblaciones de la zona, para levantar un cerco de resistencia contra el proyecto.

La lucha de Samir Flores, la que arreció desde la radio contra el Proyecto Integral Morelos no fue solo "un capricho", como lo calificó en alguna ocasión el entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Tenía fundamentos: desde su espacio público denunció que el Proyecto Integral Morelos significaba el arrebato de más de 172 kilómetros de suelo —por el paso del gasoducto— en 39 comunidades rurales de nueve municipios de Tlaxcala, diez de Puebla y cinco de Morelos. Pero además, representa el despojo de 157 veces el agua que podría caber dentro del Estadio Azteca, en un año, lo que dejaría sin abasto de líquido para la zona agrícola de los municipios de Jantetelco, Temoac, Jonacatepec, Cuautla y Yecapixtla.

Si bien es cierto que la sola presencia de Samir en reuniones de resistencia vecinal las convertía en verdaderos mítines políticos, también es de señalar que su presencia mediática, a través de la radio, lo hizo potencializar exponencialmente su movimiento, convirtiéndose en un verdadero líder ubicuo, que al mismo tiempo dialogaba y organizaba las protestas, a través de su programación, con vecinos de Tlaxcala, Puebla y Morelos, lo que lo convirtió en un hombre potencialmente "peligroso" para los intereses económicos de la CFE, las empresas inversoras y para los gobiernos federal y estatal de Morelos, empecinados en el proyecto.

El mayor grado de "peligrosidad" lo alcanzó Samir Flores cuando comenzó a manifestar su rechazo a la consulta popular que pretendía —y luego lanzó con resultados poco confiables— el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció someter a la consulta de la gente la viabilidad de continuar o no con el Proyecto Integral Morelos. Samir empezó a organizar a su pueblo para rechazar la consulta y, en caso de que se llevara a cabo —como finalmente ocurrió—, manifestar un rotundo no al proyecto.

El resultado de la consulta, donde increíblemente ganó el "sí" al proyecto, ya no lo pudo conocer Samir Flores Soberanes; a él lo asesinaron dos días antes de que se llevara a cabo la votación. Ya no pudo conocer las cifras oficiales que orgulloso cantó el presidente de la República desde su púlpito mañanero, desde donde anunció que 59.5 por ciento de los que votaron se dijeron a favor de la puesta en operación de la obra, mientras que 40.1 por ciento se expresó en contra (Altolaguirre, 2019). Según las cifras presidenciales, en la consulta participaron un total de 55 715 personas, de las que 7 558 son del estado de Puebla, 43 176 votantes lo hicieron en el estado de Morelos, en tanto que otros 4 951 son del estado de Tlaxcala.

Para que esos resultados se produjeran sin ninguna oposición, a Samir Flores lo tuvieron que asesinar. De este asesinato, que oficialmente se atribuye al crimen organizado, el gobierno federal se desmarcó al asegurar que "este gobierno (el de López Obrador)

se caracteriza por la no violencia como estrategia para la solución de los problemas" (Presidencia de la República, 2019), y agradeció de paso "a todos los que participaron en esta consulta".

A Samir Flores Soberanes lo asesinaron la mañana del 20 de febrero de 2019, cuando salía de su domicilio en la comunidad de Amiltzingo, del municipio de Temoac. Fue encontrado por un grupo armado que le disparó en cuatro ocasiones, acertándole dos balas en la cabeza y otras dos en el tórax. Lo ejecutaron un día después de que organizó una protesta para rechazar públicamente la puesta en operación de la termoeléctrica, la que —insistió en señalar— solo beneficiaría a la planta minera e industrial de Morelos, a la que se suministraría energía eléctrica a bajo costo, con cargo al despojo del agua y el territorio de las comunidades indígenas de Morelos.

El activista, de 30 años de edad y de origen náhuatl, todavía se reunió —un día antes de su muerte— con el superdelegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Erik Flores, quien trató de convencer al grupo encabezado por Samir Flores Soberanes para que en la consulta todos fueran a favor del Proyecto Integral Morelos. En la reunión Samir cuestionó severamente la postura oficial de pleno apoyo del presidente López Obrador para la puesta en operación del proyecto, por el daño que ocasionará al territorio y el agua de la zona.

Por esa razón el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) estima que este fue un asesinato de Estado, pero aun así reclamó al gobierno federal una rápida y puntual investigación sobre los hechos, no sin recordar que el presidente López Obrador generó con su discurso un encono contra los opositores a la termoeléctrica, al cuestionar y descalificar el movimiento encabezado por Samir Flores, lo que de alguna forma pudo haber contribuido al asesinato.

El esclarecimiento del homicidio de Samir Flores, que al cierre de este trabajo aún se encontraba sin avances debido a que la Fiscalía del Estado de Morelos "extravió" algunas de las pruebas base de la investigación, se parece mucho al del periodista Rafael

Murúa Manríquez, asesinado en el municipio de Santa Rosalía, Baja California Sur, el 20 de enero de 2019, por el solo hecho de que algunas pruebas han sido "extraviadas" por la Procuraduría General de Justicia de ese estado, como si se tratara de un guion oficial preestablecido para no llegar al esclarecimiento.

El caso del periodista Rafael Murúa Manríquez, y su desenlace fatal, es similar al de Samir Flores Soberanes, solo que a la inversa: mientras Samir Flores era un activista que en su evolución de denuncia social pasó al periodismo, Rafael Murúa se desplazó con su denuncia desde el periodismo hacia el activismo social. Los dos desembocaron en lo mismo: la muerte a causa de la denuncia y enfrentamiento con los poderes fácticos.

El cuerpo de Rafael Murúa Manríquez fue encontrado luego de más de 24 horas de estar desaparecido. Presentaba lesiones de arma punzocortante a la altura del pecho y un impacto de bala en la cabeza, con el que se presume fue ultimado. En la escena del crimen se recogieron tres envoltorios con mariguana, lo que constituyó la base para que la Procuraduría de Justicia de ese estado iniciara una campaña de desprestigio contra el periodista, igual que en otros casos de comunicadores asesinados que se refieren más adelante.

La última vez que se supo de Rafael Murúa con vida fue la noche del día antes de que apareciera su cuerpo asesinado, cuando mantuvo comunicación, a través de mensajes de texto, con un familiar suyo. Sus familiares no volvieron a saber de él hasta que la policía local dio cuenta del cuerpo sin vida encontrado en un camino vecinal, a la altura del kilómetro 40 de la carretera Mulegé-Guerrero Negro, en las inmediaciones de la comunidad de San Ignacio. El vehículo que utilizaba el periodista, un Nissan, Altima, color blanco, de modelo atrasado, fue encontrado sobre la Calle 11, casi esquina con la avenida Constitución, en la zona urbana de Santa Rosalía.

A Rafael Murúa lo secuestraron sus captores, quienes lo sacaron del poblado para darle muerte. Era un hecho que se le había anunciado repetidamente mediante una serie de mensajes intimidatorios que él dio a conocer no solo a su más cercano

círculo familiar y de amigos sino al gobierno federal, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al cual solicitó protección ante el evidente riesgo en el que estaba su integridad. "Me están advirtiendo que me van a asesinar.Y es información que viene de una casa de uno de los coordinadores del gobierno municipal", dijo Rafael Murúa al solicitar la intervención del Mecanismo de Protección en el mes de noviembre de 2018.

Aun así, el Mecanismo de la Secretaría de Gobernación no actuó con diligencia. Se limitó al manual del inservible protocolo de operación: le otorgó un dispositivo electrónico de comunicación y ubicación, el llamado botón de pánico, con el que oficialmente se cumplió con la medida de protección reclamada, aunque finalmente el botón de pánico solo sirvió para ubicar el cuerpo sin vida del periodista, que es para lo que ha servido ese dispositivo en algunos de los casos de otros periodistas asesinados.

Ni por error se les ocurrió a los funcionarios del Mecanismo de Protección del gobierno federal la idea de sacar a Rafael Murúa de su región, ni dotarlo de elementos de seguridad que lo resguardaran día y noche, como se hace con frecuencia con algunos periodistas de élite que trabajan para medios informativos nacionales desde la Ciudad de México, que cuentan con guardaespaldas. No. Los encargados del Mecanismo consideraron que con el botón de pánico se solucionaría el problema del riesgo que pesaba sobre Murúa.

En la evaluación de riesgo que hicieron los funcionarios federales del Mecanismo de Protección sobre la situación de Rafael Murúa, poco importó que las amenazas de muerte contra el comunicador vinieran de algunos de los colaboradores de la administración municipal de Mulegé, que fueron señalados en una serie de actos de corrupción que tocaban directamente al presidente municipal José Felipe Prado Bautista, del Partido Nueva Alianza, con quien Murúa se confrontó directamente.

No solo eso, el Mecanismo tampoco tomó en cuenta que Murúa Manríquez, cuya trinchera de denuncia social era la esta-